



RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN RELACION CON LA CONTROVERSIA DERIVADA DEL DICTAMEN NUMERO DIC/CRAF-008/03, DE LA COMISION REVISORA PERMANENTE DE LA APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS, RELACIONADO CON LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL PARTIDO ALIANZA SOCIAL, ACREDITADO ANTE ESTE ORGANO CENTRAL, BAJO EL RUBRO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCION DEL VOTO O GASTOS DE CAMPAÑA

Heroica Puebla de Zaragoza, a veintiséis de marzo de dos mil tres.

VISTOS, para resolver en definitiva los autos que integran el expediente formado con motivo de la controversia derivada del dictamen número DIC/CRAF-008/03, de la Comisión Revisora Permanente de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, relacionado con los informes presentados por el Partido Alianza Social, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña, y:

R E S U L T A N D O

I.- Que, la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos en sesión de fecha tres de junio de dos mil dos continuada el día veintiocho del mencionado mes y año, aprobó el dictamen número DIC/CRAF-007/02, relativo a los informes justificatorios presentados por el Partido Alianza Social, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña.

En el referido documento la Comisión revisora dictaminó en lo conducente lo siguiente:

“ . . .

PRIMERO.- Esta Comisión Revisora es competente para conocer y emitir opinión sobre el presente asunto, en términos de los considerandos I y II, de este dictamen.

SEGUNDO.- Este órgano del Consejo General determina que existen observaciones respecto del manejo de los recursos y de los informes justificatorios presentados por el Partido Alianza Social, únicamente por lo que respecta al rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña, en términos de los considerandos III, V y VII del presente dictamen.

TERCERO.- Remítase al Consejero Presidente del Consejo general de este organismo, el presente dictamen, para que, por su conducto, sea sometido al

conocimiento del citado Organo Central y el mismo esté en posibilidad de dictar la resolución correspondiente, previos los trámites legales, en atención al considerando VIII, de este dictamen.
...”

II.- Que, este Organo Central durante el desarrollo de la sesión ordinaria de fecha veinticuatro de julio del año en curso aprobó el Proceso Administrativo para la resolución de las controversias derivadas de los dictámenes de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se detectaron irregularidades en los informes justificatorios.

III.- Que, el Consejo General del Organismo en sesión ordinaria de fecha diez de septiembre del año en curso conoció y resolvió sobre el dictamen número DIC/CRAF-007/02, determinado en lo conducente lo siguiente:

“... ”

Una vez que este Organo Central estudió y analizó todas y cada una de las constancias que integran el expediente formado a la controversia materia de esta resolución, se arriba a la conclusión de que el dictamen número DIC/CRAF-007/02 de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Organismo, cumple con los requisitos señalados por el artículo 77 de los Lineamientos Generales que se han mencionado.

Asimismo, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, atendiendo a los razonamientos expresados en esta resolución y con la finalidad de garantizar que resolverá el presente asunto observando de manera irrestricta los principios de certeza y exhaustividad, considera que para cumplir con el fin superior que es garantizar el respeto de los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones, señalado en el artículo 79 del Código aplicable, es necesario normar el proceso de revisión de los Informes Justificatorios de la aplicación del financiamiento público relativo a las actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña, presentados por el Partido Alianza Social, respecto de las observaciones detectadas por la Comisión Revisora, por lo que para lograr tal fin debe modificar, en el caso que proceda, el dictamen mencionado en el párrafo anterior.

En este orden de ideas y en atención a lo dispuesto tanto por el artículo 52 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla como por los Lineamientos Generales para la Fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado, se considera que la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los mencionados institutos políticos deberá ser la encargada de normar el mencionado proceso de fiscalización, de acuerdo con las disposiciones aplicables y una vez concluido el mismo emitir el dictamen correspondiente.

Visto lo anterior, con la finalidad de garantizar el oportuno cumplimiento de este fallo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 fracción VI del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado, el Consejo General del Organismo instruye a la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos a iniciar el desarrollo del proceso que normará la revisión de los informes justificatorios del mencionado Instituto Político a más tardar en diez días hábiles posteriores a aquel en el que cause estado el presente fallo.
...”

IV.- Que, la Comisión Revisora del financiamiento de los partidos políticos, dando cumplimiento a la resolución emitida por este Organismo Superior de Dirección, el dieciocho de septiembre del año próximo pasado aprobó el acuerdo número 02/CRAF/180902, por el que dentro del término señalado en el fallo de referencia inició los trabajos tendientes a normar el procedimiento de revisión de los informes justificatorios del Partido Revolucionario Institucional, relacionados con el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña.

V.- Que, la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos en sesión de fecha trece de febrero de dos mil tres aprobó el dictamen número DIC/CRAF-008/03, relativo a los informes justificatorios presentados por el Partido Revolucionario Institucional, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña.

En el referido documento la Comisión revisora dictaminó en lo conducente lo siguiente:

“ . . .

III.- Que, en atención a todo lo anterior, esta Comisión Permanente analizará, de manera exhaustiva, el cumplimiento, por parte del citado Partido Político, de los extremos que establece el artículo 19 de los *“Lineamientos generales para la fiscalización del financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado”*, mismo que en forma textual dice: *“Los informes justificatorios por concepto de gastos de campaña, deberán ser presentados a más tardar dentro de los setenta y cinco días siguientes, contados a partir en que concluyan las campañas. Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en las elecciones en que hayan participado los partidos políticos, especificando los gastos que el partido y el candidato hayan ejercido en el ámbito territorial correspondiente, así como el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña. En consecuencia, deberá presentarse:*

- a) *Tantos informes como candidatos a diputados al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa hayan registrado ante las autoridades electorales.*
- b) *Tantos informes como candidatos a miembros de ayuntamientos hayan registrado ante las autoridades electorales”.*

Es decir, relacionando tal artículo 19 de los mencionados *Lineamientos*, con el diverso 52, primer párrafo, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, se aprecia, por parte de esta Comisión Revisora, que los Partidos Políticos deberían presentar los informes justificatorios respectivos, acompañados del sustento documental correspondiente; sin embargo, de la práctica obtenida, existen casos donde algunos de ellos presentaron sus informes, con sustento documental; otros, esos informes sin soporte documental; y, finalmente, algunos sólo el sustento documental, sin informe alguno.

Por lo que respecta a los informes referidos en el inciso a) anterior, el Partido Alianza Social presentó, correlativamente, los veinte informes justificatorios, con su sustento documental, de las campañas de sus candidatos a diputados al Congreso del Estado, por el principio de mayoría relativa; ya que el referido Partido Político registró, ante este Instituto, fórmulas de candidatos a diputados, para veinte de los veintiséis distritos electorales uninominales que comprende el Estado de Puebla.

Con relación a los informes referidos en el mencionado inciso b), el citado instituto político, de igual forma, presentó, correlativamente, el informe justificatorio, con su sustento documental, de la campaña de sus candidatos a miembros de ayuntamiento; toda vez que el referido Partido Político registró, ante este Instituto, planilla de candidatos a miembros de ayuntamiento, en uno, de los doscientos diecisiete municipios, que comprenden el Estado de Puebla.

Lo anterior, tal como consta en los archivos de este Instituto, documentales que, en términos de los artículos 358, fracción II, y 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, hacen prueba plena toda vez que no fueron objetadas.

De esta manera, la Comisión Revisora cuenta con los instrumentos jurídicos para determinar, si en dichos informes, existen inconsistencias o irregularidades, que deban ser observadas, en su caso. Además, se analizará la documentación correspondiente, y que acompañó, en su momento, el referido Partido Político a los mencionados informes justificatorios; esto es, no sólo se analizarán esos informes, sino también el sustento documental respectivo.

Máxime, que en cumplimiento de sus atribuciones, esta Comisión Permanente, debe observar los principios rectores a que se refiere el artículo 8 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y que a la letra dice: *“En el ejercicio de la función estatal para organizar las elecciones, serán principios rectores, la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, debiéndose entender por:*

I.- Legalidad.- Adecuación estricta a la ley de todas las actuaciones de las autoridades electorales, de los ciudadanos y de los partidos políticos;

II.- Imparcialidad.- Actuación neutral de quienes desarrollan la función estatal de organizar las elecciones, sin beneficiar ni perjudicar a alguna de las partes en la contienda electoral;

III.- Objetividad.- Desarrollar las actividades electorales tomando como base la realidad única, sin importar cualquier punto de vista parcial que se tenga de ella;

IV.- Certeza.- Realizar la función electoral con estricto apego a los hechos y en la realidad única, a fin de que sean fidedignos, confiables y verificables; y

V.- Independencia.- La capacidad irrestricta del Instituto para cumplir con la función encomendada por sí solo, sin intervención alguna de los órganos del poder público.”

En virtud de lo anterior, y previo análisis de la documentación correspondiente, esta Comisión Revisora determina que sí existen observaciones que plantear, en relación con los informes justificatorios presentados por el Partido Alianza Social, acreditado ante el órgano central de este organismo, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña, tal como se desprende del contenido de los siguientes considerandos y de los anexos que forman parte integral de este dictamen; observaciones que se precisan, específicamente, en el considerando VII, de este documento.

...

V.- Que, el artículo 54, fracción XI, del Código de la materia, dispone: *“Los partidos políticos tienen las obligaciones siguientes: Informar al Consejo General de los procedimientos para la elección de sus candidatos a los diferentes puestos de elección popular, particularmente del régimen de financiamiento de los mismos, los topes a los gastos de campañas y el origen y los montos totales de los recursos utilizados”.*

Además, el diverso 44 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, dispone: *“Los partidos políticos registrados que participen en los procesos electorales, tendrán derecho en forma equitativa al financiamiento público y privado para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y las de sus actividades tendientes a la obtención del voto universal, independientemente de las demás prerrogativas que les otorguen otros ordenamientos.”*

Por su parte, los numerales 8, 9 y 10 del *“Reglamento que establece los lineamientos, formatos, instructivos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los Partidos Políticos nacionales en el registro de sus ingresos y egresos y en la presentación de sus informes”*, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, regulan lo relativo a las “transferencias” de recursos federales en efectivo, que los Comités Ejecutivos Nacionales u órganos equivalentes de cada partido político, hagan a sus órganos en las entidades federativas, para poder erogarlos en campañas electorales locales.

En virtud del contenido de dichos numerales, esta Comisión Revisora considera que el monto de las transferencias correspondientes son parte del régimen de financiamiento de los Partidos Políticos para la campaña dos mil uno, y elemento fundamental para calcular los montos aplicados en las referidas campañas y para determinar si se cumplió con no rebasar los topes a los gastos de campaña. Quedando claro que la comprobación de la aplicación de dichos recursos se hará ante las instancias del Instituto Federal Electoral. Lo anterior, a fin de no invadir esferas competenciales, ni fiscalizar recursos provenientes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político respectivo.

Ante ello, esta Comisión Permanente considera a los montos de dichas transferencias, como no fiscalizables, por parte de este organismo, sólo informativos.

En el caso concreto, con la información aportada por el Partido Alianza Social sí se pudieron identificar territorialmente las transferencias efectuadas.

Además, con relación a esa transferencia, sí se pudieron especificar los egresos realizados por transferencias de su Comité Ejecutivo Nacional, tal como se desprende del anexo C-1, que corre agregado a este dictamen, para formar parte integral del mismo.

...
VII.- Que, en atención al considerando anterior, se debe tomar en cuenta al artículo 77 de los citados *Lineamientos*, el cual señala que *“una vez recibido el informe a que hace mención el artículo anterior, la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento procederá a realizar un dictamen que deberá contener por lo menos los siguientes puntos:”*

“a).- Los procedimientos y formas de revisión aplicados.”

Por lo que respecta a este inciso, debe decirse que los procedimientos y formas de revisión aplicados, consistieron en el examen de las operaciones financieras, documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que fueron necesarias para efectuar la vigilancia de los recursos financieros, en estricto apego a lo establecido en los *“Lineamientos generales para la fiscalización del financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado”*, y en aplicación a los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, Normas de Auditoría y Leyes Fiscales vigentes, permitiendo obtener una seguridad razonable del empleo de los recursos con que contó el Partido Político en mención.

Es decir, se utilizaron técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros, las cuales consistieron en el estudio general de las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más significativos para concluir si era necesario profundizar en su estudio; asimismo se aplicó el análisis de las cuentas de los estados financieros, así como la verificación aritmética de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas, y por último la verificación física de que el sustento documental correspondiente reuniera los requisitos legales respectivos.

El inciso b), del mencionado artículo 77, dispone:

“b).- El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes por actividades ordinarias y el acceso a los medios de comunicación social y el informe de campaña presentados por cada partido político, y de la documentación comprobatoria correspondiente, señalando las aclaraciones y rectificaciones que haya presentado cada partido político después de haber sido notificado con ese fin y la valoración correspondiente;”

Sobre este punto, cabe advertir que el presente dictamen únicamente se ocupa del rubro relativo a la obtención del voto o gastos de campaña, y en opinión de quien esto dictamina, los informes justificatorios y los estados financieros presentados por el Partido Alianza Social, con relación al rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña, previo análisis de los mismos, presentaron observaciones mismas que, en su momento, y como se manifestó en el capítulo de antecedentes de este dictamen, le fueron notificadas al referido instituto político y su valoración se fue haciendo, paulatinamente, conforme se presentaron las aclaraciones, por parte del instituto político, en su caso.

Finalmente, el inciso c), del artículo 77, de los citados *Lineamientos*, establece:

“c).- En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los informes o generadas con motivo de la revisión.”

Sobre este último inciso, debe señalarse que la existencia de errores u omisiones técnicas determinadas en la revisión que realizaron la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, de este organismo, y esta Comisión Revisora, a la documentación comprobatoria sobre el manejo de esos recursos, no fueron cumplimentadas por el instituto político en cuestión, tal como se advierte de la documentación correspondiente y, en resumen, de los anexos A, A-1 y A-2, que corren agregados a este dictamen, para formar parte integral del mismo.

Esto es, en principio, es de observarse que el Partido Alianza Social incumplió con lo dispuesto por el artículo 13 de los *Lineamientos Generales para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado*, ya que aplicó recursos bajo el rubro del acceso equitativo a los medios de comunicación, para el desarrollo de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña.

En segundo lugar, es de observarse que el Partido Alianza Social incumplió con lo dispuesto por los artículos 19, 56 y 65 de esos *Lineamientos*, tal como se desprende de los casos detallados en el mencionado anexo A-1, de este dictamen, los cuales se dan aquí por reproducidos, como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones, para los efectos correspondientes.

En virtud de todo lo anterior, y una vez analizados los informes y demás documentación que obra en los expedientes respectivos, esta Comisión Permanente considera que existen observaciones en el manejo de los recursos y en los informes justificatorios, por parte del Partido Alianza Social, respecto al rubro de gastos de campaña u obtención del voto, que erogó dicho instituto político, en el año dos mil uno.

...

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, fracción IV, del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado, la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos:

D I C T A M I N A

PRIMERO.- Esta Comisión Revisora es competente para conocer y emitir opinión sobre el presente asunto, en términos de los considerandos I y II, de este dictamen.

SEGUNDO.- Este órgano del Consejo General determina que existen observaciones respecto del manejo de los recursos y de los informes justificatorios presentados por el Partido Alianza Social, únicamente por lo que respecta al rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña, en términos del considerando III, V y VII del presente dictamen.

...”

VI.- Que, mediante memorándum número IEE/CRAF-019/03, de fecha dieciocho de febrero del año en curso, recibido en la oficina de la Presidencia el día diecinueve del mencionado mes y año, el Consejero Electoral Presidente de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, Licenciado José Manuel Rodoreda Artasánchez, remitió al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado el dictamen materia de la presente resolución.

VII.- Que, el Secretario General del Organismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Proceso Administrativo señalado en el punto II de Resultando, mediante oficio número IEE/SG-027/03 de fecha veintiuno de febrero del año en curso, corrió traslado al Partido Alianza Social, con el dictamen número DIC/CRAF-008/03, de la Comisión Revisora Permanente de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, relacionado con los informes presentados por dicho Instituto Político, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña, con la finalidad de que en el término de diez días posteriores a aquel en el que se efectuó la notificación contestara lo que a su interés conviniera, aportando las pruebas necesarias para acreditar su dicho, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le tendría contestando el mencionado dictamen en sentido negativo.

La notificación en comento se efectuó el día veintiuno de febrero del año dos mil tres, según consta en la razón correspondiente.

VIII.- Que, el Partido Alianza Social no contestó en tiempo y forma el dictamen de la Comisión Revisora mencionado en el punto inmediato anterior, por lo que el Secretario General del Organismo hizo efectivo el apercibimiento efectuado mediante oficio número IEE/SG-027/03, teniéndose en consecuencia al mencionado Instituto Político contestando en sentido negativo el documento identificado con el número DIC/CRAF-008/03.

IX.- Que, el diez de marzo del año en curso, el Partido Alianza Social, por conducto de su Representante Propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, Ciudadano Miguel Ramos García presentó en la Oficialía de Partes del Organismo un escrito por el que dio contestación de manera extemporánea, al dictamen número DIC/CRAF-008/03, de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los

partidos políticos acreditados ante este Organismo Electoral, relacionado con los informes justificatorios presentados por dicho Instituto Político, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña

En el referido escrito el partido político en comento argumentó textualmente lo siguiente:

“ . . .

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 4, 42 Fracción IX y 53 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, artículo 80 de los Lineamientos Generales para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos Acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla, vengo en tiempo y forma a manifestar lo que a derecho e interés conviene al Partido Político que represento, en contra del Dictamen número DICICRAF-008103 anexo en copia simple a su oficio número IEEISG-027 103 de fecha 21 febrero de los corrientes y notificado el mismo día; escrito este que para su integración, fundamento y procedencia, a continuación paso a exponer las particularidades siguientes:

I.- NOMBRE y DOMICILIO DEL RECURRENTE.- Partido Alianza Social, con domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio del presente escrito.

11.- ACTO QUE SE RECLAMA.- Lo constituye el improcedente Dictamen número DIC/CRAF-008/03 contenido en el escrito número IEE/SG-O27/03 de fecha 21 de Febrero del 2003 y notificado el mismo día por el Mtro. José Antonio Bretón Betanzos, Secretario General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, mediante el cual determinan indebidamente que existen irregularidades respecto del manejo de los recursos y de los Informes Justificatorios de Gasto de Campaña, en términos de sus considerandos III, V y VII de su dictamen, el cual se emite en franca violación de las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República Mexicana, por falta de fundamentación y motivación eficiente, así como el no tomar en cuenta las peticiones, manifestaciones, aclaraciones y rectificaciones presentadas en su momento oportuno, quebrantando sin lugar a dudas el derecho de Petición que se consagra en el artículo 8º Constitucional.

III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Instituto Electoral del Estado de Puebla, a través de la Secretaria General de dicho Instituto.

IV.- FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- El día 21 de Febrero del 2003.

Fundo la procedencia del presente escrito en las siguientes consideraciones de hecho y derecho.

V.- HECHOS:

1.- Con fecha 21 de Enero del 2002, entregue en tiempo y forma los Informes Finales de Campaña en el proceso electoral 2001 ante la Dirección de Prerrogativas Partidos Políticos y Medios de Comunicación (se anexa copia del escrito de dicha entrega).

2.- Con fecha 18 de Marzo del 2002, tuve una reunión con el C.P. Hugo Campos Cabrera Jefe del Departamento de Fiscalización de la Dirección de Prerrogativas Partidos Políticos y Medios de Comunicación con el objeto de que se me informara de las observaciones que determino la anterior Dirección a los Informes Justificatorios de Gastos de Campaña, para la cual se elaboro una minuta con número DPPPM-05/02 y me indico que tendría que cumplimentar las observaciones que se señalaban en dicha minuta (se anexa copia de dicha minuta).

3.- Con fecha 01 de Abril del 2002, se dio formal contestación a la minuta DPPPM-O5/02, aclarando y cumplimentando las observaciones que habían determinado, además se solicito atentamente que tomaran en consideración las aclaraciones y correcciones dentro de su revisión y así en su momento dieran por solventadas y subsanadas tales observaciones (se anexa copia de

dicha escrito); como se puede apreciar al no producir contestación a lo solicitado se quebranta el derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual desde este momento se deja al partido político que represento en total estado de indefensión.

4.- Con fecha 20 de Mayo del 2002, se recibió el oficio número IEE/CRAF - 037/02 de fecha 15 de Mayo del 2002, emitido por el Lic. José Manuel Rodoreda Artasánchez, Presidente de la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento Público de los Partidos Políticos, oficio en el cual me remitieron el anexo que contenía las observaciones correspondientes a los informes de campaña ya la documentación comprobatoria, concediéndome rectificar lo que considerara pertinente (se anexa copia de dicho oficio).

5.- Con fecha 25 de Mayo del 2002, se contesto en tiempo y forma el oficio número IEE/CRAF-037/02, aclarando, rectificando, entregando documentación e información para todas y cada una de las observaciones relativas a los informes de campaña que había determinado la Comisión Revisora; además se solicito nuevamente que tomaran en consideración las aclaraciones y correcciones hechas valer, para que en su momento dieran por solventadas y subsanadas todas y cada una de las observaciones que determino la Comisión Revisora (se anexa copia del escrito en mención). De igual manera que como sucedió con la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, la comisión revisora no realizo contestación a lo solicitado, motivo por el cual se viola claramente el derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional, dejando nuevamente al partido político que represento en un completo estado de indefensión.

6.- Con fecha 25 de Julio del año 2002, se notifico en el domicilio del partido que represento el oficio número IEE/SG-813/02 emitido por el Lic. Jose Antonio Breton Betanzos, Secretario General del Instituto Electoral del Estado, oficio que contiene el Dictamen número DIC/CRAF -007/02 en el cual determinan indebidamente observaciones e irregularidades respecto del manejo de los recursos y de los informes justificatorios de Gastos de Campaña presentados por el Partido Alianza Social, en términos del oficio y copia del dictamen aludido junto con todas sus cédulas de

7.- Con fecha 02 de Agosto del año 2002, se contesto en tiempo y forma el oficio número IEE/SG-813/02, combatiendo el dictamen DIC/CRAF -007/02 y manifestando lo que a derecho e interés convenía al partido político que represento, además se solicito que se tuviera por presentado en tiempo y forma el escrito y documentos anexos, impugnando el ilegal dictamen para que previos los tramites legales se dejaran sin efecto todas y cada una de las observaciones de dicho dictamen; por tercera ocasión hasta la fecha no se ha producido contestación alguna a lo solicitado violando lo preceptuado por el artículo 8° Constitucional dejando una vez más al partido político que represento en completo estado de indefensión (se anexa copia de dicho escrito).

8.- Con fecha 21 de Febrero del presente año, se notifico en el domicilio del partido que represento el oficio número IEE/SG-027/03 emitido por el Lic. Jose Antonio Breton Betanzos, Secretario General del Instituto Electoral del Estado, oficio que contiene copia del ilegal Dictamen número DIC/CRAF -008/03 en el cual determinan indebidamente observaciones respecto del manejo de los recursos y de los informes justificatorios de Gastos de Campaña presentados por el Partido Alianza Social, en términos del considerando III, V y VII del dictamen combatido (se anexa copia de dicho oficio y copia del dictamen junto con sus cédulas de observaciones).

Por no ajustarse a derecho el dictamen combatido y las actuaciones del Instituto Electoral del Estado de Puebla, es que se hace valer este escrito de contestación, manifestando lo que a derecho e interés conviene al partido político que represento.

VI.- AGRAVIOS:

PRIMERO.- El dictamen que se impugna, es ilegal toda vez, que en términos del artículo Octavo Constitucional claramente señala que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición ya toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve termino al peticionario.

Lo anterior es por considerar que en dicho dictamen se violaron en perjuicio de mi representado las garantías de audiencia, legalidad y debido proceso, toda vez que tanto la Dirección de Prerrogativas,

Partidos Políticos y Medios de Comunicación, La Comisión Permanente Revisora de la aplicación del Financiamiento de los partidos políticos y la Secretaria General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, no entraron al estudio, análisis y valoración de todos los conceptos de aclaraciones, rectificaciones, entrega de documentación e información que se realizaron en tiempo y forma respecto de las observaciones que determinaron en su revisión de Gastos de Campaña del 2001, sino que arbitrariamente se emite un dictamen ilegal e improcedente dejando al partido político que represento en total estado de indefensión, lo anterior se refuerza por la actitud de no responder a las peticiones del Partido Alianza Social.

Asimismo el dictamen que se combate es ilegal en virtud de que transgrede lo preceptuado por los artículos 41 fracción III Constitucional, 8 fracción I del Código de Instituciones y Procesos Electorales y artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que como un principio rector es la de salvaguardar la Legalidad en todas las actuaciones de las autoridades electorales.

En el entendido de que salvaguardar la Legalidad constituye una de las obligaciones principales de los servidores públicos.

En efecto los fundamentos legales mencionados con anterioridad son violados claramente al no respetarle al partido que represento el derecho de ser escuchado, atendido y sobretodo al no ser informado de los resultados a las peticiones hechas valer por escrito, de manera pacifica y respetuosa, requisitos indispensables para hacer valer el derecho de petición.

Por todo lo anteriormente argumentado niego lisa y llanamente haber recibido contestación a mis escritos a que hacen mención los puntos 3, 5 y 7 del capitulo de hechos de este escrito y por lo tanto las actuaciones que llevo a cabo el Instituto Electoral del Estado de Puebla, por no ajustarse a los requisitos y limites previstos en las leyes, sus resultados, carecen de todo valor probatorio en términos del articulo 16 párrafo IO Constitucional y por lo tanto el dictamen que se combate debe dejarse sin efectos junto con todas sus observaciones por ser ilegal y no ajustarse a derecho.

SEGUNDO.- El dictamen que se irnpugna, es improcedente e ilegal toda vez, que en términos de sus considerandos III y V dictaminan que existen observaciones respecto del manejo de los recursos y de los informes justificatorios de gastos de campaña presentados por el partido político que represento.

Analizando sus considerandos números III y V de su dictamen consideramos que no existe observación alguna, por lo que es completamente falso e improcedente lo que dictamina por lo siguiente:

1.- El partido político que represento cumplió formalmente y de manera oportuna con la presentación de los Informes Justificatorios de Gastos de Campaña, tal y como lo señala el punto número 1 de los hechos del presente escrito, presentando 20 informes de campaña de los candidatos a diputados al congreso del estado, por el principio de mayoría relativa y 1 informe de campaña de candidato a miembros de ayuntamiento, especificando los gastos que cada candidato ejerció en su ámbito territorial correspondiente, así como especificando el origen de los recursos que utilizaron en su campaña.

2.- El partido político que represento informo oportunamente en todos y cada uno de los informes de campaña de los recursos aplicados por nuestros candidatos en lo relativo a Recursos Federales que por conducto de nuestro comité ejecutivo nacional nos otorgo; y además ninguno de nuestros candidatos rebaso el tope de gastos de campaña cumpliendo así cabalmente con las disposiciones legales aplicables.

Como se puede apreciar el partido político que represento cumplió cabalmente con los artículos 19 y 74 inciso B) de los Lineamientos en comento, Informo de los recursos federales aplicados a cada candidato y por consiguiente resultan improcedentes la observaciones que dictan en su punto numero Segundo y en términos de su considerandos números III y V del dictamen combatido y por consecuencia deben dejarse sin efectos.

TERCERO.- El dictamen que se impugna, es improcedente e ilegal toda vez, que en el punto segundo que dictaminan y en términos del considerando VII párrafo Siete determinan que los errores u omisiones técnicas determinadas en la revisión que realizaron tanto la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación así como la Comisión Revisora, a la documentación comprobatoria sobre el manejo de esos recursos, no fueron cumplimentadas por el partido político que represento.

Lo anterior es completamente falso, ya que basta con analizar los escritos de contestación y los documentos anexos, a que hacen referencia los puntos 3 y 5 de hechos de este escrito (y que se anexan para su conocimiento), las observaciones, errores u omisiones técnicas que emitieron tanto la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, así como la Comisión Permanente Revisora de la aplicación del financiamiento de los Partidos Políticos, las cumplimentamos de manera oportuna y formal.

Es cierto, dimos cabal contestación a todas y cada una de las observaciones que nos requirieron, más sin embargo nunca se dio formal contestación a los resultados de mis escritos, dejando a mi representado en completo estado de indefensión violando claramente los preceptos constitucionales 8,14 y 16, motivo por el cual el dictamen número DIC/CRAF-OO8/03 resulta improcedente e ilegal y debe dejarse sin efectos por no respetar el derecho de petición y por falta de fundamentación y motivación, ya que en un acto totalmente arbitrario se emite el mencionado dictamen carente de validez, violatorio de derechos y sobre todo asegurando que no se cumplimiento lo solicitado, siendo que es falso lo que aseguran por lo anteriormente argumentado.

CUARTO.- El dictamen que se impugna, es improcedente e ilegal toda vez, que en el punto segundo que dictaminan y en términos del considerando VII párrafo Ocho determinan que el Partido Político que represento incumplió con lo dispuesto por el artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado, ya que supuestamente se aplicó recursos bajo el rubro de los medios de comunicación, para el desarrollo de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña.

En efecto esta observación es improcedente e ilegal por lo siguiente:

En el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, Título Segundo denominado "De los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos".

En su artículo 42 fracción III, se establece claramente que son derechos de los partidos políticos la de disfrutar de las prerrogativas y recibir el financiamiento público ya su vez en el artículo 45 fracción I se señala que el financiamiento público deberá ser para:

- A) El sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.
- B) Las actividades tendientes a la obtención del voto; y
- C) El acceso equitativo a los medios de comunicación.

Por otro lado analizando el código en comento, respecto de las obligaciones y prohibiciones que tienen los partidos políticos, en ninguno de sus artículos señala prohibición alguna respecto de utilizar recursos para cada rubro en específico, sino que exclusivamente señala que el financiamiento público deberá ser para los tres incisos mencionados anteriormente.

Por lo anterior, del análisis comparativo entre el artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado y el artículo 45 fracción I del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, se advierte una contradicción entre ambos. En efecto mientras que la fracción I del artículo 45 del código en comento, se indica que el financiamiento público deberá ser para: El sostenimiento de sus actividades a la obtención del voto y el acceso equitativo a los medios de comunicación, el artículo 13 de los Lineamientos indica que los partidos políticos deberán aplicar estricta e invariablemente los recursos otorgados a las actividades señaladas en el código de la materia. Por ende, se presenta una antinomia entre ambos preceptos, la cual debe resolverse atendiendo al principio de rango legal, según el cual en caso de concurrencia de normas contradictorias de distinta jerarquía, ha de atenderse con preferencia a la disposición principal: esto es, en este caso a lo estatuido en el código y no en los lineamientos, ya que estos solo tienden a facilitar a los

destinatarios del código la observancia de este, a través de disposiciones generales, imperativas y abstractas que detallen 'supuestos normativos de aplicación sin que la norma de los lineamientos pueda contrariar al código por ser este superior, atendiendo al principio de rango legal.

Por lo tanto es indebida la aplicación que dictó la comisión revisora y debe dejarse sin efectos la observación, en virtud de que mi representado no incurrió en irregularidades que ameritarán ser observadas.

Por todo lo anteriormente argumentado es improcedente e ilegal el dictamen número DIC/CRAF-OO8/03, en virtud de que es violatorio de las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra carta magna y por lo tanto debe dejarse sin efectos el dictamen combatido en forma lisa y llana, por ser contrario a derecho.

QUINTO.- El dictamen que se impugna, es improcedente e ilegal toda vez, que en el punto segundo que dictaminan y en términos del considerando número VII párrafo Nueve determinan que el Partido Político que represento incumplió con lo dispuesto por el artículo 19 de los Lineamientos Generales para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado.

Lo anterior es falso e improcedente que haya incumplido el artículo 19 de los Lineamientos multicitados, ya que el partido político que represento cumplió formalmente y de manera oportuna con la presentación de los Informes Justificatorios de Gastos de Campaña, tal y como lo señala el punto número 1 de los hechos del presente escrito, presentando 20 informes de campaña de los candidatos a diputados al congreso del estado, por el principio de mayoría relativa y 1 informe de campaña de candidato a miembros de ayuntamiento, especificando los gastos que cada candidato ejerció en su ámbito territorial correspondiente, así como especificando el origen de los recursos que utilizaron en su campaña.

Como se puede apreciar el partido político que represento cumplió cabalmente con los artículos 19 y 74 inciso B) de los Lineamientos en comento y por consiguiente resulta improcedente la observación que dictan en su punto número Segundo y en términos de su considerando número VII párrafo nueve del dictamen combatido y por consecuencia debe dejarse sin efectos todas y cada una de las observaciones que relacionan en el anexo A-1 y que hagan mención al artículo 19 de los Lineamientos Generales de la materia, por no ser verdad, por carecer de fundamentación y motivación eficiente y por no ajustarse a derecho.

En efecto existe una mala fundamentación y motivación, ya que dentro del concepto de sus observaciones que se encuentran en el anexo A-1 indican que el sustento documental presenta fecha de expedición fuera del periodo de campaña, nada que ver con lo estipulado en el artículo 19 de los Lineamientos de la materia, el cual indica que los informes justificatorios por concepto de gastos de campaña deberán ser presentados a más tardar dentro de los 75 días siguientes, contados a partir en que concluyan las campañas electorales, obligación que cumplió el partido alianza social en tiempo y forma según consta en el punto 1 del capítulo de hechos del presente escrito.

Por lo anteriormente comentado se niega lisa y llanamente haber incumplido el artículo 19 de los lineamientos en cuestión, por lo que las observaciones de su dictamen contempladas en el anexo A-1 deben dejarse sin efectos, por ser ilegales y contrarias a derecho.

SEXTO.- El dictamen que se impugna, es improcedente e ilegal toda vez, que en el punto segundo que dictaminan y en términos del considerando número VII párrafo Nueve determinan que el Partido Político que represento incumplió con lo dispuesto por el artículo 65 de los Lineamientos Generales para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado.

Lo anterior es falso, improcedente e ilegal que el partido político que represento haya incumplido lo dispuesto por el artículo 65 de los lineamientos en mención, por lo que debe anularse la observación que determinan respecto a la supuesta infracción de el artículo anteriormente enunciado en términos del artículo 238 fracción IV del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que transgreden los artículos 14 y 16 constitucionales, 5 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, como consecuencia de una indebida interpretación y aplicación a este último numeral toda vez, que el artículo 65 de los

Lineamientos en cuestión señala claramente que la documentación, deberá cumplir con los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables y del análisis al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación en ninguna de sus fracciones obliga a que los comprobantes contengan el ticket y el domicilio de quien solicita el comprobante, por lo que en efecto es improcedente la observación que determinan, en virtud de que se viola en perjuicio de mi representado lo preceptuado por el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que se procede a apreciar un criterio distinto a lo que establecen las disposiciones legales y concluya que mi representado infringió el artículo 65 de los Lineamientos en comento y por lo tanto debe dejarse sin efectos en forma lisa y llana las observaciones que relacionan en el anexo A-I de su dictamen en todo lo que fundamenten que se incumplió el artículo 65 de los lineamientos de la materia.

Reforzando este agravio, cabe mencionar que el artículo 65 de los Lineamientos Generales para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla, es ilegal en virtud de que somos un Partido Político Nacional y por lo tanto nos sujetamos a las disposiciones federales.

SEPTIMO.- El dictamen que se impugna, es improcedente e ilegal toda vez, que en el punto segundo que dictaminan y en términos del considerando número VII párrafo Nueve determinan que el Partido Político que represento incumplió con lo dispuesto por el artículo 56 de los Lineamientos Generales para la Fiscalización del Financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado.

Lo anterior es falso, improcedente e ilegal que el partido político que represento haya incumplido lo dispuesto por el artículo 56 de los lineamientos en mención, tal artículo establece claramente que los partidos políticos deberán utilizar el financiamiento público, exclusivamente en el sostenimiento de actividades ordinarias, el acceso a los medios de comunicación y para sus actividades tendientes a la obtención del voto respectivamente.

Efectivamente es falso que haya incumplido el artículo 56 de los lineamientos, ya que bajo protesta de decir verdad el financiamiento público que recibimos se aplico exclusivamente a los conceptos establecidos en el artículo 56 y no fue utilizado para otros conceptos que no fueran ellos.

Por lo anteriormente señalado deben anularse todas las observaciones que determinan en su anexo A-I y que fundamenten que se incumplió lo señalado en el artículo 56 de los Lineamientos de la materia ya que lo anterior carece de fundamentación y motivación, dejando a mi representado en completo estado de indefensión violando claramente lo preceptuado por el artículo 4 del código de la materia y artículos 14 y 16 constitucionales, motivo por el cual el dictamen número DIC/CRAF-008/03 resulta improcedente e ilegal por debe dejarse sin efectos.

OCTAVO.- El dictamen que se impugna, es improcedente e ilegal toda vez, que la Comisión Permanente Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos tuvo que ver aplicado los principios de congruencia y de exhaustividad en la aplicación que realizo a el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, a los Lineamientos de la materia, a nuestros informes, al sustento documental presentado, a las aclaraciones, rectificaciones y entrega de documentación e informes complementarios.

En efecto, el principio de exhaustividad establece claramente que la comisión permanente revisora tuvo que agotar por completo sus procedimientos de revisión, revisión que carece de la aplicación de dicho principio; en virtud de lo anterior al no apegarse al principio de exhaustividad sus resultados carecen de congruencia, legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza violando sin lugar a dudas los principios rectores a que se refiere al artículo 41 fracción III Constitucional y artículo 8 del código en comento.

En este orden de ideas, basándonos en el artículo 75 de los lineamientos de la materia, señala claramente que el procedimiento de revisión se sujetará a reglas establecidas para ello, y en su inciso d) fracción III, es claro que en su procedimiento, la comisión debió tomar en cuenta las aclaraciones o rectificaciones presentadas por los partidos políticos, situación que paso por alto; así mismo el artículo 77 inciso b) de los mencionados Lineamientos menciona que el dictamen que elabore tal comisión revisora deberá contener por lo menos, de la revisión valorando las aclaraciones y rectificaciones ptésentadas por el partido político que represento, lo anterior no

indica que la comisión revisora deberá solamente indicar en su dictamen que el partido presento las aclaraciones y rectificaciones y su valoración las hizo paulatinamente conforme las presentamos, si no que debió señalar claramente el resultado y la conclusión después de hacer su respectiva valoración, situación que no cumple los requisitos para que su dictamen proceda.

Debido a lo anterior resulta claro que la actuación de la comisión permanente revisora representa un acto de arbitrariedad violatoria de principios tanto legales como constitucionales, dejando al partido político que represento en total estado de indefensión, motivo por el cual el dictamen combatido debe dejarse sin efectos en forma lisa y llana junto con todas y cada una de sus observaciones, por ser contrario a derecho.

A continuación ofrezco a favor de mi representado las siguientes:

VII.- PRUEBAS:

- 1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Copia de la Minuta número DPPPM-05/02 DEL 18/03/02.
- 2.- LA DOCUMENTAL oficio número IEE/CRAF-037/02 de fecha 15/05/02.
- 3.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Copia de oficio IEE/SG-813/02 de fecha 25/07/02, el cual contiene el ilegal Dictamen número DIC/CRAF-007/02.
- 4.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Copia de oficio IEE/SG-027/03 de fecha 21/02/03, el cual contiene el Dictamen combatido número DIC/CRAF- 008/03.
- 5.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en Copia del Escrito de Entrega de Informes de Campaña del año 2001 de fecha 21 de enero del 2002.
- 6.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en Copia de Escrito de Contestación a minuta No. DPPPM/05/0~de fecha 27 de marzo del 2002 y recibido el 01/04/02.
- 7.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en Copia de Escrito de Contestación a Oficio No. IEE/CRAF-037/02~ de fecha 24/05/02 y recibido el 25/05/02.
- 8.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en Copia de Escrito de Contestación a Oficio No. IEE/SG-813/02, de fecha 25/07/02 y recibido el 25/05/02.
- 9.- LA PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA.- Consistente en todas las presunciones que se deriven de los hechos controvertidos y que me favorezcan.
- 10.- LA INSTRUMENTAL.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones que se realicen en el expediente que se forme, con motivo de este escrito y que me favorezcan.

Las probanzas enunciadas las relaciono, con todos y cada uno de los hechos y agravios narrados en el presente escrito.

VIII.- PUNTOS PETITORIOS.-

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, a usted c. Secretario General del Instituto Electoral

PRIMERO.- Tenerme por presentado con este escrito y documentos que anexo, en tiempo y forma impugnando el ilegal dictamen.

SEGUNDO.- Tenerme por ofrecidas y admitir las pruebas anteriormente enumeradas.

TERCERO.- Para el caso de que se considere que este escrito sea oscuro, irregular o incompleto, prevenirme para aclararlo, corregirlo o complementarlo.

CUARTO.- En su oportunidad, previos los tramites legales, dictar resolución definitiva, dejando sin efectos todas y cada una de las observaciones que se anexan al dictamen combatido, por ser contraria a derecho.

...”

X.- Que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5 del Proceso Administrativo para la resolución de controversias derivadas de los dictámenes de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se detectaron irregularidades en los informes

justificatorios, el Secretario General del Organismo procedió a integrar el expediente relativo a la controversia materia del dictamen DIC/CRAF-008/03.

Lo anterior, con la finalidad de estudiar de manera integral las constancias que componen dicho expediente y estar en posibilidad de resolver el presente asunto con estricto apego a los principios de certeza y exhaustividad.

XI.- Que, una vez que se efectuó el estudio correspondiente y en atención a que los presentes autos se encuentran en estado de ser resueltos, se somete al conocimiento del Pleno del Consejo General del Organismo el presente proyecto de resolución, en los términos que a continuación se plantean.

CONSIDERANDO

1.- Que, el Consejo General del Organismo es competente para conocer y resolver la presente controversia derivada del dictamen número DIC/CRAF-004/02 de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante este Organismo Electoral, en términos de lo dispuesto por los artículos 53, 89 fracción XX del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 1 y 8 del Proceso Administrativo para la resolución de las controversias derivadas de los dictámenes de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se detectaron irregularidades en los informes justificatorios.

2.- Que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 del Proceso Administrativo en cita, se tuvo al Partido Alianza Social contestando en sentido negativo el dictamen señalado en el considerando que precede, en consecuencia de lo anterior y con fundamento en lo señalado por los artículos 42 fracciones I y IV y 80 fracción IV del Código de la materia y el diverso 3 del Proceso en comento, dicho Instituto Político se encuentra debidamente acreditado ante el Consejo General de esta Organismo Electoral por lo que se reconocer su personería en el presente asunto.

III.- Que, observando para ello el principio de exhaustividad al que deben apegarse todas las resoluciones emitidas por las autoridades electorales tal y como lo establece la tesis relevante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: *“EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”*, este Organo Central debe determinar si el dictamen de la Comisión Revisora del Financiamiento de los partidos políticos materia de este fallo se encuentra debidamente fundado y motivado.

Con la finalidad de garantizar el estudio exhaustivo del asunto materia de esta resolución, el Consejo General del Organismo considera necesario establecer el método que utilizará para analizar todas y cada una de las constancias que integran el expediente relativo, por lo que con la finalidad de dar certeza al mencionado análisis se estudiará en primer lugar el dictamen elaborado por la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, junto con sus anexos; posteriormente se valorará la presunción generada a favor del mencionado Instituto Político; y por último los demás elementos que se integraron al expediente y que se relacionan con la revisión de los informes justificatorios presentados, esto con la finalidad de poder relacionar todos y cada uno de los elementos que lo integran y contar con los datos que permitan determinar con certeza si el dictamen materia de este fallo se encuentra debidamente fundado y motivado y en consecuencia es procedente aprobarlo en sus términos.

Las disposiciones legales aplicables para el estudio que realizará el Consejo General del Instituto Electoral del Estado son:

- A. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla;
- B. Lineamientos Generales para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado;
- C. Proceso Administrativo para la resolución de controversias derivadas de los dictámenes de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se detectaron irregularidades en los informes justificatorios; y
- D. Acuerdo número CG/AC-048/02, por el que establece el criterio de interpretación del artículo 52 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla aprobado por el Consejo General del Organismo en sesión ordinaria de fecha veinticuatro de julio de dos mil dos.

4.- Que, tal y como se estableció en el considerando anterior, los preceptos legales en los que se fundará esta resolución son la Constitución Política del Estado, el Código de la materia, los Lineamientos Generales de Fiscalización y el contenido del acuerdo número CG/AC-048/02, aprobado en sesión ordinaria de fecha veinticuatro de julio de dos mil dos.

En este orden de ideas, el Consejo General del Organismo, en atención a que la presente resolución tiene como finalidad determinar si existieron irregularidades en la administración de los recursos de los partidos políticos y en caso de que así se acredite comunicar dicha determinación al Tribunal Electoral del Estado para que en términos del Código aplicable sancione al instituto político que se encuentre en dicho supuesto, considera que resulta

necesario determinar en primer lugar cuál es el objetivo que persigue la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, para estar en posibilidad de determinar si los errores u omisiones en el manejo de los recursos en comento constituyen una violación a dicho fin superior.

Se considera que al establecer un marco de referencia que basado en la doctrina del derecho electoral y en la jurisprudencia que sobre el tema ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permita dilucidar cuál es el fin y la naturaleza de la figura del financiamiento de los partidos políticos en el sistema electoral mexicano, será más sencillo determinar el objetivo que persigue el control y vigilancia de dichos recursos.

En este sentido el jurista Javier Patiño Camarena al referirse al financiamiento de los partidos políticos, cita la afirmación expresada por Arturo Sánchez Gutiérrez, en el sentido de que existe una estrecha relación entre la cantidad de recursos con que cuenta un partido para sus actividades y campañas electorales y el efecto que puede generar en los electores, en los últimos años en los regímenes democráticos contemporáneos ha adquirido importancia creciente la regulación de los recursos económicos de que disponen los partidos. (“El régimen de los partidos políticos y las condiciones de competencia electoral”, intervención en el *Foro de consulta para la reforma electoral*, organizado por el Instituto Federal Electoral en mil novecientos noventa y tres).¹

Además, Patiño Camarena establece, de manera general que existen dos vías de financiamiento, la pública y la privada. El financiamiento público obedece al propósito de garantizar la independencia de los partidos políticos frente a los grupos económicos y al deseo de establecer ciertas condiciones de competencia igualitaria en la contienda electoral, es decir, este tipo de financiamiento fue una respuesta al desequilibrio de las condiciones de competencia partidaria, pues al ser el Estado el principal financiero, los partidos podrían estar en condiciones de cumplir sus funciones como instituciones representantes de la sociedad, con independencia de grupos de presión económica y avocados completamente a la actividad política.²

Por último, el mencionado jurista al citar a la investigadora María de la Luz Mijangos, señala que el financiamiento público favorece, en primer término la independencia de los partidos de los grandes capitales y se evita que la contienda electoral se vuelva censataria; asimismo considera que este tipo de financiamiento favorece la igualdad de trato en su otorgamiento y la transparencia en la asignación de recursos (Intervención en el *Foro de consulta para la reforma electoral*, organizado por el Instituto Federal Electoral en mil novecientos noventa y tres)³

¹ Patiño Camarena, Javier. Nuevo Derecho Electoral Mexicano. Ed. Constitucionalista e IFE. Quinta Edición. México D.F., 1999. Pág. 339.

² Ibidem.

³ Ibidem.

Con respecto a los criterios de jurisprudencia emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe decirse que en las distintas Tesis sustentadas por dicho Tribunal toman como base el concepto de equidad, el cual debe traducirse, necesariamente, en asegurar a aquéllos el mismo trato cuando se encuentren en igualdad de circunstancias.⁴

En este orden de ideas, se puede concluir que la regulación del financiamiento en el derecho electoral mexicano tiene como finalidad:

- A.- Asegurar la independencia financiera de los partidos políticos, protegiéndolos de los grupos económicos poderosos;
- B.- Establecer condiciones para asegurar la igualdad de condiciones en la contienda electoral;
- C.- Desde el punto de vista de la equidad en la contienda regular el monto del financiamiento privado, sin que esto signifique la desvinculación de los partidos con sus militantes, afiliados o simpatizantes.

Visto lo anterior, se puede determinar de manera general que la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos tienen como finalidad el vigilar que en la administración y aplicación de los recursos con los que cuentan estos institutos políticos garanticen la independencia financiera de los partidos políticos, la equidad en la contienda política, así como la transparencia en el ejercicio de los mencionados recursos, regulación que se da a través de disposiciones de carácter general, aprobadas con anterioridad a la revisión que establecerán los requisitos que deberán observarse, dando certeza a la misma.

Una vez que se pudo determinar de manera general el objetivo tanto de la figura del financiamiento público como de la fiscalización de la mencionada prerrogativa, corresponde ahora analizar las disposiciones legales que en la materia tienen vigencia en el Estado de Puebla, con la intención de poder determinar de manera precisa el fin que persigue la figura de la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos.

El Capítulo V, del Título Segundo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, contempla lo relativo a la revisión y vigilancia del financiamiento de los partidos políticos estableciendo en el artículo 51 que los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado de la administración de los recursos que por concepto de financiamiento reciban, así como de la presentación de informes justificatorios

⁴ La Justicia Electoral en México y su Jurisprudencia. Disco compacto editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se consultó el contenido de las Tesis cuyos rubros son: FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A FIJARLO EN IGUALES TÉRMINOS QUE EN EL ORDEN FEDERAL y FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL. EL DERECHO A RECIBIRLO ES DIFERENTE PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARTICIPANTES EN UNA ELECCIÓN ANTERIOR QUE NO DEMOSTRARON CIERTA FUERZA ELECTORAL, RESPECTO A LOS DE RECIENTE CREACIÓN.

de su aplicación. Debe indicarse que al respecto la exposición de motivos del decreto que promulgó el mencionado ordenamiento legal establece que la finalidad de esta disposición es darle transparencia y limpieza a la comprobación del financiamiento.

El diverso 52 de dicho ordenamiento prevé la existencia de una Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los institutos políticos, con facultades para auditar, fiscalizar y requerir a los propios partidos los informes justificatorios con sustento documental correspondiente, así como las aclaraciones, documentos e información que considere para la legal administración de los recursos.

Los Lineamientos generales para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado establecen como objetivo alcanzar un mayor grado de eficiencia para el control y transparencia de los ingresos y egresos de los partidos políticos, con el objeto de garantizar que el financiamiento público se aplique correctamente en los rubros que corresponda, garantizándose el correcto uso de dichos recursos que provienen del erario público y respecto del financiamiento privado, que se obtenga en la forma y montos que establece la legislación de la materia.

En este orden de ideas, se puede concluir que el objeto de la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos en el Estado de Puebla persigue los siguientes fines:

- A. Garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos con los que cuentan los partidos políticos;
- B. Respecto del financiamiento privado, asegurar que su procedencia y monto se ajuste a lo previsto por la Legislación aplicable; y
- C. Asegurar condiciones de equidad en la contienda política.

Por lo anterior, se considera que los partidos políticos que aún y cuando rindieron sus informes justificatorios con sustento documental ante la Autoridad Electoral Administrativa, presenten inconsistencias u omisiones derivadas de errores involuntarios propios de la naturaleza humana, siempre y cuando en lo general se hubiesen observado los requisitos formales que como marco de la actividad de fiscalización se establecen en los Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en tanto la justificación de los recursos sea fehaciente, sin dejar de considerar la violación a la norma correspondiente, sí cumple con el objetivo de la revisión motivo del presente.

5.- Que, en ese orden de ideas, debe decirse que después de estudiar el dictamen en comento, se determinó que:

A. El mencionado Organismo Auxiliar del Consejo General consideró que existían observaciones en los informes justificatorios del Partido Alianza Social relativos al rubro de financiamiento determinado como actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña, en atención a que:

a. Se cubrieron gastos relativos al rubro de actividades tendiente a la obtención del voto o gastos de campaña con recursos correspondientes al rubro de acceso a medios de comunicación, vulnerando lo dispuesto por el artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Fiscalización.

b. Según constan en el anexo A-1 del dictamen materia de este fallo, se observaron ciento setenta y nueve documentos, por los siguientes motivos:

i) Se presentó domicilio fiscal de la Ciudad de México Distrito Federal en dichos documentos, lo que se estimó violatorio de lo indicado por el artículo 65 de los mencionados Lineamientos.

ii) No se acompañaron con el ticket de compra respectivo, en contra de lo dispuesto por el artículo 65 de los mencionados Lineamientos.

iii) Los documentos presentaban fechas que no coincidieron con el periodo de campaña del proceso electoral ordinario del año dos mil uno, representando una violación a lo contemplado en los artículos 19 y 56 de los Lineamientos Generales de Fiscalización.

B. En atención a que el Partido Alianza Social no contestó en tiempo y forma el dictamen número DIC/CRAF-008/03, se le tuvo contestándolo en sentido negativo, es decir, se presume en su favor que niega todas las observaciones determinadas por la Comisión Revisora y que son el resultado del análisis de los informes justificatorios con sustento documental presentados por el mencionado Instituto Político.

Para comenzar con el estudio integral de todas las constancias que integran el expediente que se resuelve con este fallo, este Organismo Central estima que se debe tener en consideración lo siguiente:

Los Lineamientos Generales para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado, establecen de manera clara y ordenada el proceso de revisión al que deben someterse los informes justificatorios; así como el procedimiento que deben ejecutar tanto la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación como la Comisión Revisora, para determinar si la aplicación del financiamiento se efectuó de acuerdo a las disposiciones aplicables o bien existen observaciones en el manejo de los recursos con que cuentan los Partidos Políticos para desarrollar sus actividades.

En atención a que la revisión de los informes justificatorios que en este caso se relacionan con la comprobación del financiamiento contemplado bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña

es un proceso que se compone por una serie de momentos procesales perfectamente determinados por el Lineamiento para la Fiscalización que se ha venido citando, mismo que contempla desde la determinación del plazo para la presentación de los informes justificatorios; el establecimiento de Organos de Administración al interior de los Partidos Políticos; la definición de cada uno de los rubros de financiamiento al que pueden acceder los mencionados institutos políticos; la forma de justificar las erogaciones efectuadas por ellos; las instancias de revisión de la aplicación del mismo; así como el procedimiento para subsanar los errores, omisiones u observaciones que se detecten en la revisión, se demuestra que el diseño del régimen de fiscalización al que se encuentran sometidos los partidos políticos acreditados ante este Organo Central tiene como finalidad garantizar que las revisiones que en esta materia efectúe el Organo Auxiliar del Organo Superior de Dirección facultado para ello se efectúen respetando la garantía de audiencia de los partidos, así como los principios que rigen la función electoral.

Ahora bien, se considera pertinente indicar que en el apartado relativo a las observaciones hechas por la Comisión Revisora a la documentación presentada por el Partido Alianza Social, en el apartado b. de la sección identificada con el grafema A., se determinó como motivo de observación el hecho de que un comprobante contiene el domicilio fiscal del mencionado Partido Político correspondiente a la Ciudad de México Distrito Federal, por ser violatorio de lo dispuesto por el artículo 65 de los Lineamientos Generales de Fiscalización, pues en dicho numeral se exige que los comprobantes de los partidos políticos contengan los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, requiriendo en específico que dichos documentos contengan la clave del Registro Federal de Contribuyentes del Partido a favor de quien se expide el comprobante, con el nombre y domicilio de sus oficinas en Puebla.

En este sentido, este Organo Superior de Dirección considera que en lo que se refiere a las mencionadas observaciones no se debe pasar por alto que el propio artículo 65 del Lineamiento exige que los comprobantes contengan los requisitos que señalan las disposiciones fiscales aplicables, entre los que se encuentran asentar la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o jurídica a favor de quien se expide el comprobante, así como su domicilio fiscal. En el caso concreto, la disposición fiscal aplicable para determinar el domicilio fiscal es el Código Fiscal de la Federación, que establece en su artículo 10 fracción II, inciso a) que se considera como domicilio fiscal tratándose de personas morales, el lugar donde se encuentre la administración principal del negocio.

Visto lo anterior, este Organo Superior de Dirección estima que al ser el Partido Alianza Social un Partido Político con registro nacional, su administración principal se encuentra en la sede de su Organo de Dirección Nacional, que se ubica en la Ciudad de México Distrito Federal, por lo que al contener sus documentos comprobatorios domicilio de esa Ciudad no se

vulneran las disposiciones fiscales aplicables, por lo que no consideró procedente dicha observación

Ahora bien, respecto de la presunción generada a favor del Partido Político observado, que se deriva de su contestación en sentido negativo, debe decirse que la misma no se considera suficiente para justificar que en la aplicación de los recursos que por concepto de financiamiento público local se le otorgaron se hubiesen utilizado los correspondientes a una modalidad del mismo para cubrir egresos relativos a otra modalidad y tampoco es suficiente para determinar que la revisión efectuada por la Comisión en comento no se apegó a las disposiciones legales que sobre el particular se encuentran vigentes en el Estado de Puebla.

Una vez que este Organismo Central estudió y analizó todas y cada una de las constancias que integran el expediente formado a la controversia materia de esta resolución, se arriba a la conclusión de que el dictamen número DIC/CRAF-008/02 de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Organismo, cumple con los requisitos señalados por el artículo 77 de los Lineamientos Generales que se han mencionado.

Por último se considera que se debe poner especial atención al hecho de que tal y como se manifiesta en el resultado de la fiscalización de los recursos del Partido Alianza Social se efectuaron erogaciones en determinados rubros del financiamiento para cubrir conceptos que se incluyen en un rubro distinto, lo que de acuerdo con el criterio establecido en el considerando 4 de esta resolución puede ser contrario a los fines para los que se creó este tipo de prerrogativa y los que persigue su fiscalización, pues precisamente uno de los mecanismos para asegurar la correcta aplicación de los recursos fue la creación de los rubros del financiamiento, que garantizan que no se efectúe una aplicación indiscriminada de recursos en el desarrollo de una sola actividad, previendo que se puedan presentar tanto el manejo indebido de recursos públicos como que se fomenten condiciones de inequidad en la contienda electoral.

6.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado resuelve aprobar en sus términos el dictamen materia de este fallo, en atención a que como se señaló en el considerando inmediato anterior, en su contenido consta la correcta ejecución del procedimiento de revisión establecido en los Lineamientos generales para la fiscalización de la que derivaron las observaciones que se han presentado líneas arriba.

Lo anterior, con excepción a las observaciones efectuadas a la documentación en la que se asentó el domicilio fiscal del Partido del Trabajo ubicado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con lo argumentado en el

considerando número 5, tales hechos no se puede considerar una infracción a las disposiciones aplicables.

7.- Que, en atención a que el Consejo General del Organismo determinó la existencia de observaciones en la revisión de los informes justificatorios del Partido de la Alianza Social, de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 53 del Código de la materia, lo procedente es remitir al Tribunal Electoral del Estado el expediente formado con motivo de este fallo, para que en términos de lo dispuesto por el mencionado Ordenamiento Legal dicha Autoridad Jurisdiccional determine lo conducente.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XXV del artículo 91 del Código Comicial vigente se faculta al Consejero Presidente del Consejo General del Organismo para remitir al Tribunal Electoral del Estado la documentación correspondiente.

8.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91 fracción XXV del Código aplicable, el Consejo General faculta al Consejero Presidente para notificar el contenido de la presente resolución al Partido de la Sociedad Nacionalista, en los términos establecidos por el Proceso Administrativo para la resolución de controversias que se ha citado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado

R E S U E L V E

PRIMERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado es competente para conocer y resolver la controversia derivada del dictamen número DIC/CRAF-008/03 de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditado ante este Organismo Electoral, relacionado con los informes justificatorios presentados por el Partido Alianza Social, acreditado ante este Organo Central, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña, según lo dispuesto por el considerando número 1 de este fallo.

SEGUNDO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado reconoce la personería del Partido Alianza Social, en términos de lo dispuesto por el punto 2 de considerando de la presente resolución.

TERCERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprueba el dictamen número DIC/CRAF-008/03, de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditado ante este Organismo Electoral, relacionado con los informes justificatorios presentados por el Partido Alianza Social, acreditado ante este Organo Central, bajo el rubro de actividades tendientes a la obtención del voto o gastos de campaña,

de acuerdo con las manifestaciones expresadas en los considerandos 5 y 6 de este fallo.

CUARTO.- Se faculta al Consejero Presidente del Consejo General, para remitir al Tribunal Electoral del Estado el expediente formado con motivo de esta resolución, de acuerdo con lo dispuesto por el considerando número 7 de este fallo.

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos dispuestos en el considerando 8 de esta resolución.

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en sesión ordinaria de fecha veintiséis de marzo de dos mil tres.

CONSEJERO PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

**LIC. ALEJANDRO ARTURO
NECOECHEA GOMEZ**

**MTRO. JOSE ANTONIO
BRETON BETANZOS**